

21ª REUNION — 10ª SESION ORDINARIA — AGOSTO 3 DE 1983

Presidencia de los señores diputados Juan Carlos Pugliese,

Alvaro Carlos Alsogaray y Oscar Luján Fappiano

Secretarios: doctor Carlos Alberto Bravo y señor Carlos Alberto Béjar

Prosecretarios: señores Hugo Belnicoff y Ramón Eladio Naveiro

DIPUTADOS PRESENTES:

ADAMO, Carlos
ALASINO, Augusto José M.
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Lucía Teresa N.
ALBORNOZ, Antonio
ALDERETE, Carlos Alberto
ALESSANDRO, Julio Dario
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALSOGARAY, María Julia
ALTERACH, Miguel Ángel
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ ECHAGUE, Raúl Angel
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo
ALLEGRONE de FONTE, Norma
ARAMBURU, José Pedro
ARAMOUNI, Alberto
ARANDA, Saturnino Dantti
ARCINAGA, Normando
ARGANARAZ, Heraldo Andrés
ARGANARAZ, Ricardo
ARMAGNAGUE, Juan Fernando
AUVERO, Carlos
AVALOS, Ignacio Joaquín
AVILA, Mario Efraín
AVILA GALLO, Exequiel José B.
BADRAN, Julio
BAKIRDJIAN, Isidro Roberto
BALANDA, Mariano Pedro
BARBEITO, Juan Carlos
BARRENO, Rómulo Victor
BAUZA, Eduardo
BELLO, Carlos
BERCOVICH RODRIGUEZ, Raúl
BIANCIOOTTO, Luis Fidel
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo
BLANCO, Jesús Abel
BOGADO, Florio Eleuterio
BONIFASI, Antonio Luis
BORDA, Osvaldo
BOTELLA, Orosia Inés
BOTA, Felipe Esteban
BREST, Diego Francisco
BRIZUELA, Défor Augusto
BUDINO, Eduardo Horacio
BULACIO, Julio Segundo
CACERES, Luis Alberto
CAMBARERI, Horacio Vicente
CANATA, José Domingo

CANGIANO, Augusto
CANTOR, Rubén
CAPPELLERI, Pascual
CARDO, Manuel
CARDOZO, Ignacio Luis Rubén
CARIGNANO, Raúl Eduardo
CARMONA, Jorge
CARRIZO, Raúl Alfonso Corpus
CASAS, David Jorge
CASSIA, Antonio
CASTIELLA, Juan Carlos
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Juan Bautista
CAVALLARI, Juan José
CAVALLO, Domingo Felipe
CEVALLO, Eduardo Rubén P.
CLERICI, Federico
COLLANTES, Genaro Aurelio
CONTRERAS GÓMEZ, Carlos A.
CORTESE, Lorenzo Juan
CORZO, Julio César
COSTANTINI, Primo Antonio
CRUZZA, Melchor René
CURI, Oscar Horacio
CURTO, Hugo Omar
D'ALESSANDRO, Miguel Humberto
DALMAU, Héctor Horacio
D'AMBROSIO, Angel Mario
DE NICHILO, Cayetano
DEL RIO, Eduardo Alfredo
DÍAZ, Manuel Alberto
DÍAZ BANCALARI, José María
DI CAPRIO, Marcos Antonio
DIGÓN, Roberto Secundino
DI TELLA, Guido
DUMÓN, José Gabriel
DURANONA y VEDIA, Francisco de
ELIZALDE, Juan Francisco C.
ENDEIZA, Eduardo A.
ESPINOZA, Nemecio Carlos
ESTEVEZ BOERO, Guillermo Emilio
FAPPIANO, Oscar Luján
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNÁNDEZ de QUARRACINO, Matilde
FERREYRA, Benito Orlando
FOLLONI, Jorge Oscar
FREYTES, Carlos Guido
FURQUE, José Alberto
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCIA, Roberto Juan

GARGIULO, Lindolfo Mauricio
GAY, Armando Luis
GERARDOZZI, Mario Alberto
GIACOSA, Luis Rodolfo
GIMENEZ, Ramón Francisco
GOLPE MONTIEL, Néstor Lino
GÓMEZ MIRANDA, María F.
GONZÁLEZ, Alberto Ignacio
GONZÁLEZ, Eduardo Aquiles
GONZÁLEZ, Héctor Eduardo
GONZÁLEZ, Joaquín Vicente
GOROSTEGUI, José Ignacio
GROSSO, Carlos Alfredo
GUIDI, Emilio Esteban
GUZMAN, María Cristina
HERRERA, Dermidio Fernando L.
HUARTE, Horacio Hugo
IBARRIA, José María
INGARABIO, Emilio Felipe
IRIGOYEN, Roberto Osvaldo
JAROSLAVSKY, César
KRAEMER, Bernhard
LAMBERTO, Oscar Santiago
LARRABURU, Dámaso
LAZARA, Simón Alberto
LEMA MACHADO, Jorge
LENCINA, Luis Ascensión
LESTELLE, Eugenio Alberto
LIZURUME, José Luis
LÓPEZ, José Remigio
LOZA, César Augusto
LUDEK, Italo Argentino
LLORENS, Roberto
MACEDO de GÓMEZ, Blanca A.
MAC KATHY, César
MANRIQUE, Luis Alberto
MANZANO, José Luis
MARIN, Rubén Hugo
MARTÍNEZ, Gabriel Adolfo
MARTÍNEZ MÁRQUEZ, Miguel J.
MASINI, Héctor Raúl
MATZKIN, Jorge Rubén
MÉNDEZ DOYLE de BARRIO, María L.
MERINO, Eubaldo
MILANO, Raúl Mario
MONJARDÍN de MASCI, Ruth
MONSERBAT, Miguel Pedro
MOREAU, Leopoldo Raúl
MOSCA, Carlos Miguel A.
MUGNOLO, Francisco Miguel

MULQUI, Hugo Gustavo
MUTTIS, Enrique Rodolfo
NACUL, Miguel Camiel
NATALE, Alberto A.
NERI, Aldo Carlos
NUIN, Mauricio Paulino
OEGAZ, Alfredo
ORIETA, Gaspar Baltazar
ORTIZ, Pedro Carlos
OSOVNIKAR, Luis Eduardo
PACCE, Daniel Victorio
PAMPURO, José Juan B.
PARENTE, Rodolfo Miguel
PARRA, Luis Ambrosio
PASCUAL, Rafael Manuel
PAZ, Fernando Enrique
PELLIN, Osvaldo Francisco
PEPE, Lorenzo Antonio
PERA OCAMPO, Tomás Carlos
PEREZ, René
PIERRI, Alberto Reinaldo
POSSE, Osvaldo Hugo
PRONE, Alberto Josué
PUEBLA, Ariel
PUERTA, Federico Ramón
PUGLIESE, Juan Carlos
RABANAQUE, Raúl Octavio
RAMOS, Daniel Omar
RAPACINI, Rubén Abel
RAUBER, Cleto
REINALDO, Luis Aníbal
REQUEJO, Roberto Vicente
RIQUEZ, Félix
RODRIGO, Juan
RODRIGO, Osvaldo
RODRIGUEZ, Jesús
ROGGERO, Humberto Jesús
ROJAS, Ricardo
ROMERO, Carlos Alberto
ROMERO, Roberto

ROSSO, Carlos José
ROY, Irma
RUCKAUF, Carlos Federico
SALDUNA, Bernardo Ignacio R.
SALTO, Roberto Juan
SAMMARTINO, Roberto Edmundo
SANCASSANI, Benito Gandhi E.
SILVA, Roberto Pascual
SOCCHI, Hugo Alberto
SORIA, Carlos Ernesto
SORIA ARCH, José María
SOTELO, Rafael Rubén
STAVALE, Juan Carlos
STORANI, Conrado Hugo
STORANI, Federico Teobaldo M.
STUBBIN, Marcelo
TAPARELLI, Juan Carlos
TELLO ROSAS, Guillermo Enrique
TOMA, Miguel Ángel
TOMASELLA CIMA, Carlos Lorenzo
TORRESAGASTI, Adolfo
TRIACA, Alberto Jorge
ULLOA, Roberto Augusto
USIN, Domingo Segundo
VACA, Eduardo Pedro
VALERGA, Carlos María
VANOLI, Enrique Néstor
VARGAS AIGNASSE, Rodolfo Marco
VEGA ACIAR, José Omar
VILLEGAS, Juan Orlando
YOUNG, Jorge Eduardo
YUNES, Jorge Omar
ZAFFORE, Carlos Alberto
ZAVALEY, Jorge Hernán
ZUBIRI, Balbino Pedro

AUSENTES, CON LICENCIA:

BAIL LIMA, Guillermo Alberto
IGLESIAS, Herminio¹

JUEZ PÉREZ, Antonio
MANZUR, Alejandro¹
MOREYRA, Omar Demetrio¹
RAMÍREZ, Ernesto Jorge¹
SELLA, Orlando Enrique¹
SILVA, Carlos Oscar¹
SIRACUSANO, Héctor¹
TORRES, Manuel¹
VAIRETTI, Cristóbal Carlos¹
VANOSI, Jorge Reinaldo
ZINGALE, Felipe¹

AUSENTES, CON AVISO:

ALENDE, Oscar Eduardo
DUHALDE, Eduardo Alberto

AUSENTES, SIN AVISO:

ABDALA, Luis Oscar
ADAIME, Felipe Teófilo
BAGLINI, Raúl Eduardo
CARRIZO, Víctor Eduardo
DE LA SOTA, José Manuel
DUSSOL, Ramón Adolfo
MARTÍNEZ, Luis Alberto
MIRANDA, Julio Antonio
RAMOS, José Carlos
RIUTORT, Olga Elena
RODRÍGUEZ, José
ROMANO NORRI, Julio César A.
ROMERO, Julio
ROSALES, Carlos Eduardo
TORRES, Carlos Martín
ZOCOLA, Elío Pablo

¹ Solicitud pendiente de aprobación de la Honorable Cámara.

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional (Pág. 3444.)
2. Diario de Sesiones. (Pág. 3444.)
3. Asuntos entrados. Resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo. (Pág. 3444.)
4. Licencias para faltar a sesiones de la Honorable Cámara. (Pág. 3445.)
5. Homenaje a la memoria de monseñor Enrique Angelelli. (Pág. 3446.)
6. Plan de labor de la Honorable Cámara y modificación del horario de las sesiones de tablas. (Pág. 3448.)
7. Pedidos de informes o de pronto despacho, consultas y mociones de preferencia o de sobre tablas:
Moción del señor diputado Matzkin de que se trate sobre tablas el proyecto de resolución del señor diputado Fappiano y otros sobre promoción de juicio político al señor ministro de Economía, doctor Juan Vital Sourrouille (549-D.-88) y de que se dé entrada y se traten sobre tablas los proyectos de ley del señor diputado Manzano y otros sobre incremento de la jubilación y de la pensión mínima a partir del 1º de agosto de 1988 (1.738-D.-88) y sobre aumento

de emergencia de los salarios para todos los trabajadores en relación de dependencia a partir de la misma fecha (1.739-D.-88). (Pág. 3449.)

8. Consideración del proyecto de ley en revisión sobre sanción de actos discriminatorios determinados por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos (38-S.-87). (Pág. 3458.)
9. Moción de orden del señor diputado Ibarbia de que vuelva a comisión el asunto al que se refiere el número 8 de este sumario. Es retirada. (Pág. 3460.)
10. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 8 de este sumario. Se sanciona definitivamente (ley 23.592). (Pág. 3462.)
11. Moción de orden del señor diputado Aramburu de que se aplase la consideración de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales recaídos en la presentación del señor presidente de la Honorable Cámara por la que se puso en conocimiento del cuerpo una actitud del señor diputado Cambareri (2.559-D.-87). Se aprueba. (Pág. 3478.)
12. Moción de orden del señor diputado Manzano de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a efectos de proponer la entrada y consideración sobre tablas de los proyectos de ley de los que es coautor sobre incremento de

13. Del señor diputado **Kraemer** y otros: revocación de la suspensión anunciada por Aerolíneas Argentinas de los vuelos nocturnos que unen la Capital Federal con Santa Cruz y la isla Grande de Tierra del Fuego; solicitud al Poder Ejecutivo (1.697-D.-88). (Pág. 3541.)
14. Del señor diputado **Brest**: incorporación de carreras en la Universidad Nacional del Nordeste; solicitud al Poder Ejecutivo (1.698-D.-88). (Pág. 3541.)
15. Del señor diputado **Pepe**: continuación de los trabajos de enrielladura en el puente ferroviario internacional entre Posadas, República Argentina, y Encarnación, República del Paraguay; solicitud al Poder Ejecutivo (1.699-D.-88). (Página 3542.)
16. Del señor diputado **Bianciotto**: creación de una universidad tecnológica en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires; solicitud al Poder Ejecutivo (1.707-D.-88). (Pág. 3542.)
17. Del señor diputado **Badrán**: declaración de interés nacional del Campeonato Mundial de Motociclismo Grand Prix de la República Argentina; solicitud al Poder Ejecutivo (1.716-D.-88). (Página 3543.)
18. Del señor diputado **Armagnague**: declaración de interés nacional de las III Jornadas Latinamericanas de Viticultura y Enología a desarrollarse en la provincia de Mendoza; solicitud al Poder Ejecutivo (1.725-D.-88). (Pág. 3543.)

X. Licencias. (Pág. 3543.)

C. Inserciones. (Pág. 3544.)

D. Asistencia a las reuniones de la Honorable Cámara (mes de mayo de 1988). (Pág. 3547.)

E. Asistencia a las reuniones de comisiones (mes de julio de 1988). (Pág. 3552.)

—En Buenos Aires, a los tres días del mes de agosto de 1988, a la hora 15 y 41:

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pugliese). — Queda abierta la sesión con la presencia de 130 señores diputados.

Invito al señor diputado por el distrito electoral de Buenos Aires don Eugenio Alberto

Lestelle a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, el señor diputado don Eugenio Alberto Lestelle procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

DIARIO DE SESIONES

Sr. Presidente (Pugliese). — Conforme a lo dispuesto por el artículo 149 del reglamento, corresponde considerar, a efectos de que los señores diputados indiquen los errores que pudieran contener, los Diarios de Sesiones de las reuniones celebradas los días 18 y 19 de mayo de 1988 —10ª reunión, 3ª sesión ordinaria—, 19 de mayo —11ª reunión, sesión ordinaria en minoría—, 1º de junio —12ª reunión, sesión ordinaria en minoría (especial)—, 1º de junio —13ª reunión, sesión ordinaria en minoría— y 8 y 9 de junio —14ª reunión, 4ª sesión ordinaria (especial).

—No se formulan observaciones.

Sr. Presidente (Pugliese). — No formulándose observaciones, se tendrán por aprobados los Diarios de Sesiones en consideración, y se autenticarán y archivarán¹.

Sr. Manzano. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Señor presidente: quisiera aclarar que una gran cantidad de señores diputados figuran ausentes sin aviso, cuando en realidad han solicitado la licencia respectiva, lo cual me consta por los pedidos que se han cursado por nuestro bloque.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se harán las verificaciones pertinentes.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde dar cuenta de los asuntos incluidos en el Boletín de Asuntos Entrados N° 21, que obra en poder de los señores diputados.

Conforme a lo resuelto por la Honorable Cámara, se prescindirá de la enunciación de dichos asuntos por Secretaría, sin perjuicio de su inclusión en el Diario de Sesiones, y se dará por aprobado el giro a las comisiones respectivas².

¹ Véase en la página 3661 la corrección dispuesta en el Diario de Sesiones correspondiente a la 12ª Reunión a solicitud del señor diputado Manzano.

² Véase la relación de los Asuntos Entrados en el Apéndice. (Pág. 3503.)

me han antecedido en el uso de la palabra, estimo que se trata de una medida extrema, por lo que el proyecto de juicio político requiere el análisis sereno y profundo de la respectiva comisión, dejando de lado cualquier arbitrariedad, discrecionalidad o apresuramiento. Una vez que el proyecto haya obtenido dictamen de dicha comisión, nuestro bloque habrá de apoyarlo. En consecuencia, no estamos a favor de la moción de tratamiento sobre tablas porque creemos que no corresponde encarar de esa forma un tema de tal magnitud.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Avalos. — Señor presidente: he escuchado las expresiones de preocupación manifestadas por los señores legisladores en el transcurso de esta sesión, consciente de la repercusión que el tema tiene en el pueblo argentino, igualmente preocupado por la crisis que nos agobia.

Sin embargo, los argentinos solemos provocar verdaderas oleadas de urgencias. Valga como ejemplo el caso de mi provincia, donde el gobierno —que es justicialista— se ha visto repentinamente urgido por la necesidad de reformar la Constitución provincial en treinta días, luego de haber transcurrido cinco años. El Movimiento Popular Catamarqueño se opuso a esa decisión por entender que no se puede tratar apresuradamente un tema tan importante y sustancial para la vida de un pueblo como es la reforma de la constitución de una provincia. Así también, en el ámbito de este recinto, creemos que una cuestión tan importante como es la política económica de un gobierno no se puede tratar sobre tablas. Por eso adelantamos nuestro voto negativo a la propuesta del señor diputado Matzkin, no obstante que compartimos su preocupación y que queremos que el tema sea profundamente analizado en el seno de la correspondiente comisión.

Sr. Presidente (Pugliese). — Habiendo vencido el término del artículo 154 del reglamento y no estando agotada la lista de oradores, continuara en la próxima sesión el tratamiento de la moción de sobre tablas en consideración.

Se va a pasar al orden del día.

8

SANCION DE ACTOS DISCRIMINATORIOS

Sr. Presidente (Pugliese). — Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre sanción de actos discriminatorios por razones tales como raza, religión o nacionalidad de las personas, y otras cuestiones conexas (expediente 38 S.-87).

Buenos Aires, 7 de abril de 1988.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Juan C. Pugliese.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

Art. 2º — Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.

Art. 3º — Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.

En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. —

Saludo a usted muy atentamente.

EDISON OTERO.
Antonio J. Macris.

Sr. Presidente (Pugliese). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mosca. — Señor presidente: solicito el voto afirmativo del presente proyecto en virtud de las siguientes consideraciones.

Estimo que su sanción no sólo es conveniente, sino también acertada, ya que debemos legislar con la debida previsión, más aún en lo que ata-

ño a la dignidad humana, más allá de los conflictos momentáneos o coyunturales que sin duda también requieren nuestra atención.

—Ocupa la Presidencia al señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, ingeniero Alvaro Carlos Alsogaray.

Sr. Mosca. — En los países civilizados, donde se atiende la integridad humana, se consideran objetivos fundamentales de la acción social la libertad, la racionalidad, la igualdad, la seguridad, el progreso y la adecuada integración entre todos ellos. De allí que las opciones vitales tendientes a la humanización de la vida surgen del crecimiento económico, la movilización política, la igualdad social y la cultura. Por consiguiente, los actos discriminatorios, sean por motivo de raza, religión, nacionalidad, ideología o sexo, son el resultado de ideas retrógradas y anticristianas, que han llevado a la degradación humana, al primitivismo y, en la generalidad de los casos, al genocidio. Todo esto sin considerar que, además, por su naturaleza los actos discriminatorios son en definitiva el preludio de la violencia.

La mayor cantidad de oportunidades sociales surge de la igualdad entre los hombres, ya que ésta nos exige la expansión progresiva de los derechos y la moderación eficaz del poder del Estado. Pero la defensa de los derechos del hombre, los cuales surgen en definitiva del derecho natural, involucra radicalizar los cambios con el objetivo de humanizar la sociedad, desechando prejuicios serviles y violentos.

La vida en democracia supera los conceptos técnicos para caer dentro de una concepción ética, donde la tolerancia es regla de convivencia, ya que el otro en definitiva es uno mismo, más allá de sus concepciones políticas o religiosas y de su raza o nacionalidad. Las sociedades sólo progresan realmente con comportamientos morales, abandonando el primitivismo que animaliza al hombre. Como escribió Juan Pablo II en *Sollicitudo rei socialis*. "El ser humano es totalmente libre sólo cuando es él mismo, en plenitud de sus derechos y deberes; y lo mismo vale decir de toda la sociedad."

Creo que los argentinos debemos recuperar nuestro coraje para enfrentar nuestros problemas, asumiendo nuestras responsabilidades y no transfiriéndolas a quienes piensan diferente a uno o creen distinto a otros.

Este país surgió como la piedra angular de Occidente; su tierra debe ser símbolo y garantía de seguridad para todos los hombres que la quieren habitar, sin detenernos a examinar el

color de su piel o el credo que profesan; basta su buena voluntad.

Este es un compromiso que ya asumieron con toda altura y dignidad los primeros argentinos; basta recordar a Esteban Echeverría, quien desde el *Dogma Socialista* nos dice: "... es también atentatorio a la igualdad todo privilegio otorgado a corporación civil, militar o religiosa, academia o universidad. Toda ley excepcional y de circunstancia. (...) La inteligencia, la virtud, la capacidad, el mérito probado: he aquí las únicas jerarquías de origen natural y divino."

Así como en el pasado se asumió con dignidad y coraje eliminar las discriminaciones arbitrarias, hoy, aprobando el proyecto de ley en tratamiento, habremos asumido el mismo compromiso para el presente y el futuro.

Asimismo, debemos recuperar ante el mundo nuestro prestigio en el campo de los derechos civiles, dando protección legal para el pleno ejercicio de las facultades que la Constitución Nacional otorga a todos los habitantes.

Creo que este proyecto de ley viene a llenar un vacío legal en nuestro ordenamiento jurídico, ya que era indispensable dar mayor operatividad a nuestras cláusulas constitucionales. A todo ello se debe agregar la dificultad de encontrar precedentes jurisprudenciales que contemplen situaciones de desigualdad por la raza, opinión política, nacionalidad, etcétera, a pesar de que bien sabemos que existen actitudes posiblemente restringidas que asumen manifestaciones discriminatorias.

Por todo lo expuesto, estoy persuadido de que aprobar el proyecto en tratamiento será brindar una herramienta legal de invalorable repercusión social y de interés para todos aquellos que se sienten discriminados.

A los efectos de redondear esta fundamentación, solicito que se inserte en el Diario de Sesiones un anexo, que he hecho llegar a la mesa de la Presidencia. (*Aplausos*).

Sr. Presidente (Alsogaray). — Oportunamente se someterá al pronunciamiento de la Honorable Cámara la solicitud del señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ruckauf. — Señor presidente: la democracia tiene estas cosas; hace un rato las fuerzas políticas de esta Cámara se dividieron por el tema económico, tan doloroso para los argentinos hoy, y ahora se unen para aprobar un proyecto de ley de mucha trascendencia.

Hace unos momentos el señor diputado Aramburu señalaba que existen problemas que le preocupan al hombre común y uno de ellos se

guramente es el de la seguridad colectiva de la población, la que no está solamente amenazada por la delincuencia que asuela a grandes sectores del territorio nacional sino también por aquellos que envenenan la mente de los jóvenes argentinos.

Cuando hacemos esta observación no dejamos de tener en cuenta las palabras del doctor Oscar Alende en la última sesión de esta Cámara, porque sabemos que toda norma es perfectible y que cuando tiende a punir actos en contra de la comunidad puede ser utilizada en exceso.

Entonces, estamos dispuestos a vigilar cuidadosamente en el futuro la aplicación de esta ley, sobre todo quienes tenemos una trayectoria política y una carga de dolor sobre nuestras espaldas. No sólo nos comprometemos a votarla, sino también a llevar ante los jueces de la República a aquellos que la violen, porque una norma como ésta no alcanza para lograr sus objetivos con su sola sanción; necesita además de la vocación de todos los ciudadanos para que pueda efectivamente ser cumplida.

En la Argentina la discriminación es una realidad, aunque muchas veces, en los discursos, sostengamos que esto no es así. En la Argentina existe el prejuicio y existen también los profetas del odio. Estos hombres, que se valen de mentes débiles y de personalidades enfermizas para llevarlas a la agresión y a la muerte, deben ser punidos por los jueces de la Nación, los cuales necesitan de normas del derecho positivo que permitan a los ciudadanos accionar en consecuencia.

No queremos ver más en las esquinas de nuestra ciudad a grupos ultras, que levantan la consigna del odio y de la muerte. No queremos ver más en los quioscos de la ciudad una literatura que busque chivos expiatorios en los hombres y mujeres del pueblo judío, en los hombres negros, en los indios, en los peronistas, en los radicales, en los intransigentes o en los ucedesistas; porque esto ha ocurrido y ocurre en nuestro país. Hace muy poco tiempo en la Argentina se hizo un baño de sangre que empezó exactamente igual que el célebre holocausto.

Por eso, los justicialistas venimos a este recinto a votar un proyecto de ley que no presentamos nosotros sino un hombre del oficialismo. Así preferimos que sea quien les habla y los diputados Manzano y Digón; preferimos no impulsar nuestro proyecto y votar el presentado por un senador del oficialismo, porque nos importó más que la ley sea sancionada antes que el "vedetismo" de un sector político opositor.

Entonces, apoyamos la sanción del Senado, aunque comprendemos las dificultades que pue-

de tener en su aplicación. Estamos dispuestos a vigilar su cumplimiento y a analizar en el futuro cuantas veces sea necesario las reformas que se propongan. Pero hay que votar este proyecto en el día de hoy, de una vez por todas, sin modificaciones, evitando dilaciones, para entregar a la ciudadanía el instrumento que necesita a fin de defenderse de aquellos grupos minúsculos que intentan envenenar a los sectores populares buscando chivos expiatorios, aprovechándose del particular momento económico que vivimos.

En este sentido, hace un rato dijimos, ante el silencio de otros bloques, que queremos incrementos de salarios y de jubilaciones porque sentimos el dolor de la gente; pero no estamos dispuestos a aceptar los argumentos de aquellos que quieren hacer creer que los problemas que tiene la gente sean atribuibles a un sector de la comunidad; son problemas de responsabilidad de los políticos, así como consecuencia de las políticas aplicadas. Estas —y quienes las ejecutan— cambian cada vez que se vota. Dentro de poco los argentinos podremos modificar políticas y elegir nuevos gobernantes; pero no estamos dispuestos a hacerles el caldo gordo a los violentos de cualquier signo, que quieran decidir con grupos de elites el futuro de los argentinos y armar las manos de aquellos que creen que se puede arreglar por la fuerza lo que en realidad se soluciona mediante el convencimiento.

Quienes hemos elegido la democracia como medio para hacer los cambios que la sociedad argentina necesita, hoy recibimos con alegría este proyecto de ley que aleja de las calles de nuestra ciudad a aquellos que atentan contra la democracia de la peor forma posible y encubierta, al recurrir a este tipo de discriminaciones en la creencia de que hay soluciones mágicas para los problemas de los argentinos, cuando estos últimos deben encararse de un modo que debemos discutir en otro ámbito.

Por estos argumentos, daremos nuestro voto afirmativo al proyecto de ley en consideración. (Aplausos.)

9

MOCION

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia. — Señor presidente: la Unión del Centro Democrático y otros partidos de centro solicitamos hace quince días una sesión especial para que fuera considerado este proyecto de ley que vino en revisión del Honorable Senado.

Además, nuestro partido comprometió su apoyo para que fuera considerada esta cuestión en esta sesión durante la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada en la víspera.

Para el liberalismo, que sostiene desde hace siglos la igualdad natural de los hombres y de éstos ante la ley, que no lo declama y que como fuerza política dio sentido e identidad a la Nación en los tiempos de la organización nacional, proclamando en el preámbulo de la Constitución que es propósito de ella "asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", la consideración de un proyecto de ley que tiende a castigar cualquier tipo de acto discriminatorio por razones de religión, raza, nacionalidad, ideología o sexo es una cuestión cara a su pensamiento.

Por esta razón deberíamos apoyar entusiastamente el proyecto en consideración; pero reconocemos que su redacción es insuficiente desde nuestro punto de vista. El artículo 1º de esta breve iniciativa dice: "Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio...".

Nuestro sector entiende que esta redacción no es admisible en un proyecto de ley antidiscriminatoria, en razón de que los actos discriminatorios son nulos de nulidad absoluta y no podrían jamás producir algún efecto, aunque no hubiera un damnificado o una persona que reclamara su cesación. Es decir, un acto que discriminara por razones religiosas, de raza, de sexo o de ideología contra alguna persona no podría jamás producir efecto alguno.

Por eso creemos que este proyecto de ley debería ser considerado en la Comisión de Legislación Penal, donde estaba radicado, para eventualmente compatibilizarlo con otro que se encuentra en la misma comisión, presentado por su presidente, el señor diputado Lorenzo Cortese, y que a criterio de nuestra bancada se ajusta mucho más a la filosofía liberal y a los principios rectores de la Constitución Nacional.

Los artículos 2º y 3º del proyecto en análisis, que se refieren a diversas modificaciones al Código Penal, contienen una redacción no menos oscura. Por lo tanto, pensamos que en un trabajo que puede encomendarse a la Comisión de Legislación Penal con recomendación de pronto despacho, puede mejorarse sensiblemente la actual redacción del proyecto venido en revisión del Honorable Senado.

Por estas razones, formulo moción de orden para que este asunto vuelva a comisión a efectos de que se llegue a un despacho que compatibilice el proyecto del Senado con el presentado por el señor diputado Cortese.

Sr. Stubrin. — Pido la palabra para referirme a la moción.

Sr. Presidente (Alsogaray). — En consideración la moción de vuelta a comisión formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin. — Señor presidente: me opongo a esta moción de vuelta a comisión con los mismos fundamentos por los que en la sesión anterior logré el voto afirmativo de esta Cámara para la preferencia acordada para considerar el proyecto en la primera sesión de tablas de esta semana —es decir la que estamos celebrando—, con o sin despacho de comisión, tal como ha venido del Senado.

Por lo tanto, invocando el voto afirmativo de más de las dos terceras partes de esta Cámara, obtenido la semana anterior, solicito que la moción formulada por el señor diputado Ibarbía sea rechazada por inconveniente.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Manzano. — Con tardanza esta Cámara está por sancionar definitivamente este proyecto, incluso luego de haber fracasado una sesión especial solicitada por integrantes de distintas bancadas.

Este proyecto cuenta para su tratamiento en esta sesión, con o sin despacho de comisión, con el respaldo de la mayoría de esta Cámara. En este marco, la moción no sólo es extemporánea, sino que además está en contraposición absoluta con la voluntad puesta de manifiesto la semana pasada de dar sanción a este proyecto, más aun teniendo en cuenta la buena predisposición de algunos señores legisladores —como los diputados Cortese y Fappiano— que, según me consta, para facilitar su sanción han pospuesto la formulación de observaciones de carácter jurídico para otra ocasión en la que presentarán un proyecto de ley modificatorio.

La vuelta a comisión por una cuestión aparentemente formal viola la voluntad de esta Cámara de dar sanción inmediata al proyecto de ley tal como ha venido del Senado de la Nación. Ese es el motivo por el que nos oponemos a la moción formulada.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Alsogaray. — Señor presidente: fundamentaré en forma personal mi voto en contra de esta moción.

Como cofirmante de un pedido de sesión especial para el tratamiento de este proyecto de ley, no puedo aceptar una propuesta de vuelta a comisión, ya que al formular dicho pedido acordamos tratar la iniciativa tal como la enviara el Senado.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Monjardín de Masci. — En nombre del Partido Federal adhiero a la postura de sancionar definitivamente hoy este proyecto por el que se castiga toda forma de discriminación en la Argentina. De esta forma responderemos a un profundo sentimiento popular y a una convicción personal y de mi partido.

Coincido con los diputados preopinantes en no aceptar la moción de vuelta a comisión.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: el bloque Demócrata Progresista votará el proyecto en consideración en los términos en que ha venido del Honorable Senado y por ello es que no apoyaremos la moción formulada.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: en ocasión en que el señor diputado Stubrin promoviera la moción de preferencia para tratar con o sin despacho de comisión este proyecto de ley, formulé mi oposición reclamando que para su tratamiento debía contar con despacho, por considerar que tal como había sido sancionado por el Senado no lograba el objetivo que se proponía y perjudicaba a ciertas razas, religiones y corrientes políticas. Entonces, en este momento existe la misma razón por la que formulara aquella oposición.

El proyecto del Senado es perfectible. La iniciativa del señor diputado Cortese es mejor que la del Senado en la medida en que no contiene una agravación genérica de todo el Código Penal. Sin embargo, quiero dejar aclarado que votaré favorablemente en general este proyecto y propondré modificaciones durante el tratamiento en particular. De todos modos, insisto en que esta propuesta no concreta el ideal que se propone y puede perjudicar a ciertas comunidades raciales o religiosas del país.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Folloni. — Señor presidente: tenemos reparos de orden metodológico y de técnica jurídica con respecto a este proyecto. Estamos de acuerdo con el fondo de la iniciativa y por ello, a los efectos de no dilatar el tratamiento de la cuestión, formularemos nuestras observaciones durante la discusión en particular.

En consecuencia, votaremos negativamente la moción de que el proyecto vuelva a comisión.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia. — Señor presidente: mi moción de orden no tuvo como objetivo dilatar el tratamiento de esta cuestión. Reconozco que mi partido solicitó oportunamente la consideración de la iniciativa en una sesión especial, pero mi intención ha sido tratar de mejorar la redacción del proyecto que viene en revisión del Honorable Senado. Nuestro partido está de acuerdo con la postura del señor diputado Garay en el sentido de votar afirmativamente el proyecto en general y procurar perfeccionar su actual redacción durante el tratamiento en particular. Por lo tanto, retiro mi moción de orden de que el proyecto vuelva a comisión.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Entonces, corresponde continuar con el tratamiento del proyecto en análisis.

10

SANCION DE ACTOS DISCRIMINATORIOS

(Continuación)

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Rabanaque. — Señor presidente: el hecho de que tengamos que sancionar la iniciativa en consideración realmente resulta preocupante para el país.

Recién escuchaba a un integrante del justicialismo, el señor diputado Ruckauf, quien expresó que íbamos a votar con alegría este proyecto. En este caso, no coincido con las expresiones de dicho legislador. No podemos votar la iniciativa con alegría porque, si bien es imprescindible modificar una realidad de sucesos y de individuos que actúan en nuestro país, ello no deja de representar un episodio lamentable y triste, ya que históricamente la Argentina ha tenido una actitud generosa al recibir a todos los hombres del mundo, abriéndoles sus brazos y tratando de evitar los enfrentamientos por cuestiones políticas, raciales, económicas, religiosas, etcétera.

El hecho de tener que aprobar un proyecto de esta índole nos demuestra que en la Argenti-

tina actual —esta Argentina de la democracia y de la dignidad— sigue habiendo sectores intolerantes y totalitarios que creen que su pensamiento u opinión es lo único valedero.

Históricamente hemos constituido un país que recibió corrientes inmigratorias que venían a buscar en esta tierra la posibilidad de una vida mejor. Durante muchos años también hemos recibido a mujeres y hombres que llegaban a nuestro suelo perseguidos por cuestiones políticas, tanto antes de la Segunda Guerra Mundial como durante ella, cuando muchos fueron echados por el nazismo y por el fascismo y tuvieron que recalar en la tierra argentina en procura de mejores condiciones de vida.

Por mucho tiempo, con el dolor que nos producía la Guerra Civil Española, también recibimos a los republicanos a fin de darles el lugar que les correspondía y de convertirlos en nuestros hermanos. Nunca le hemos preguntado a nadie de dónde venía sino qué quería y qué pensaba hacer para la construcción de esta Argentina que es justamente el producto de un crisol de razas y de la unidad de muchos que después se transformaron a través de sus hijos en un solo símbolo: el de la argentinidad.

Vivimos expuestos a sistemas totalitarios. Creo que esto es el producto de esos años de dictaduras militares, de proyectos totalitarios y de actitudes distintas a lo que habíamos vivido, soñado y aprendido con respecto a lo que es la democracia en este país. Hemos tenido que sufrir sistemas que se contradecían con la posibilidad de pensar, de actuar y de vivir en una forma mejor. Pero tenemos que reconocer que estos son problemas reales en la Argentina de hoy, muy lamentables, que hacen que existan grupos —pequeños o no— que actúan con una actitud discriminatoria respecto de otros argentinos, cualquiera sea su raza, color u origen.

Además, debemos aclarar que en esta actitud no sólo hay grupos fascistas sino también otros que a veces aparecen mezclados o intentando introducirse en partidos del campo popular, como son los grupos de Alerta Nacional, que pretenden ponerse la camiseta de un movimiento nacional y popular como es el Movimiento Nacional Justicialista.

Tenemos que decir que hoy estamos sancionando a elementos que hace poco tiempo intentaron provocar un golpe de Estado en nombre de una transformación desde el punto de vista militar o de reivindicaciones militares, tratando de terminar con la democracia en la Argentina. Tenemos que decir que los Rico, los Estrella y muchos más forman parte de esos sectores autoritarios y totalitarios.

Por todo ello digo que este proyecto es imprescindible para el país, para la sociedad argentina. Esto no deja de ser un elemento penoso para una comunidad que quiere vivir en democracia y sin odios; pero no podemos caer en la actitud conformista de creer que en la Argentina la discriminación sólo se da por cuestiones raciales o políticas. Lamentablemente aquí sigue habiendo discriminación en otros campos. Por ejemplo, a pesar de que este Parlamento ha aprobado proyectos de ley para tratar de modificar ciertas injusticias, todavía la mujer continúa siendo discriminada. Aún se presentan situaciones en las que las mujeres perciben salarios menores por un mismo trabajo o no tienen posibilidad de ascender, viéndose postergadas en muchas de sus aspiraciones personales.

Las mujeres representan el 28 por ciento de la población económicamente activa. El 18,7 por ciento son profesionales, en relación al 7,8 por ciento de hombres profesionales. A pesar de ello, según datos extraídos de la Encuesta Permanente de Hogares realizados por el INDEC para la Capital Federal y los diecinueve partidos del Gran Buenos Aires, el promedio de los salarios de los jefes de hogar es un 46 por ciento mayor que el de las jefas de hogar. En los sectores más pauperizados la situación es mucho más grave, dado que esa desproporción sube al 105 por ciento.

En cuanto a la posibilidad de acceder a los puestos dirigenciales, la situación es elocuente: sólo el 0,1 por ciento —cifra casi nula— de la población femenina económicamente activa llega a esos niveles; en cambio, respecto de los hombres la proporción alcanza al 3 por ciento.

En esta sociedad hablamos de no discriminación económica, y sin embargo vemos cómo persisten los problemas de las clases sumergidas, que cada vez viven en peores condiciones. Todo esto es también parte de la discriminación, pero no siempre se tiene en cuenta; es la discriminación de los niños abandonados, de la juventud, de la clase obrera, de la mujer, de los aborígenes, quienes desde hace casi tres años esperan que el Poder Ejecutivo reglamente la ley 23.302, de política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes.

Estamos de acuerdo con la iniciativa que consideramos, pero creemos que debemos avanzar más allá del concepto incluido en esta norma a fin de terminar con la discriminación respecto de los sectores sociales postergados. Vamos a dar nuestro voto afirmativo a este proyecto que incrementa la pena para los totalitarios y los autoritarios, pero pensamos que a la vez hay

que disminuir los padecimientos de los sectores marginados de nuestra sociedad. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Contreras Gómez. — Señor presidente: en este recinto se ha dicho que los constituyentes de 1853 aseguraron enfáticamente en el preámbulo de nuestra Carta Magna el beneficio de la libertad para ellos, para la posteridad y para todos los hombres del mundo que quisieran habitar en el suelo argentino, y que en el artículo 16 consagraron el principio de que todos los hombres son iguales ante la ley. En consecuencia, resultan inadmisibles y de imposible explicación los actos discriminatorios fundados en motivos raciales, religiosos, políticos, ideológicos o de nacionalidad.

A pesar de que consideramos que los actos discriminatorios son violatorios de la Constitución Nacional, entendemos que es plausible que una ley ratifique de manera expresa este principio tan caro al sentimiento de los argentinos, por lo que expreso nuestra total adhesión a la filosofía que informa el proyecto sancionado por el Honorable Senado y que se encuentra a consideración de esta Cámara.

A nuestro juicio, la sanción del Senado adolece de errores que podrían originar problemas de interpretación en su aplicación. En primer lugar, no compartimos el criterio de declarar anulables los actos discriminatorios, conforme se consigna en el artículo 1º, ya que por tratarse de violaciones de derechos y garantías constitucionales la nulidad debe ser absoluta y declarada de oficio por cualquier juez a cuyo conocimiento llegue un acto de esa naturaleza.

Por otro lado, si bien el proyecto establece qué debe entenderse por actos discriminatorios, lo hace en una forma demasiado amplia y, lo que es más importante, nada señala respecto de los actos que no deben calificarse como tales. Observemos que esta última situación podría acarrear una extensión en la aplicación del concepto, lo cual seguramente no está en el espíritu de los señores legisladores.

Creemos que aquellos actos que se fundan en la seguridad o en el interés de la Nación, o en disposiciones sobre prevención de delitos contra la salud y la moral, no deben ser considerados discriminatorios. Asimismo, creemos descabida la incorporación de agravantes genéricos como los establecidos en el artículo 3º del proyecto, ya que son contrarios a una correcta sistematización de los delitos en el Libro II del Código Penal. Conforme a una buena técnica, debieron haberse especificado los delitos cuya pena se agrava, que no son otros que el homici-

dio calificado por odio racial o religioso, las lesiones, las amenazas establecidas en el artículo 149 del Código Penal, los daños del artículo 184, el delito de incendio del artículo 186, y los atentados contra el orden público del artículo 203 bis del mismo código.

Por estas consideraciones —sin que ello signifique oposición a la idea— entendíamos que el proyecto debía volver a comisión. Pero habiéndose expresado en esta Cámara la voluntad de sancionar en esta oportunidad la iniciativa, adelanto que el bloque del Partido Autonomista votará afirmativamente en el convencimiento de que este Parlamento habrá de tomar las medidas necesarias a fin de que la norma sea mejorada conforme a las razones expuestas.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: nuestra dolida, sufriente y azarosa Argentina, de cuyas angustias y vicisitudes económicas hablábamos hace un momento, puede exhibir con orgullo ante el mundo una larga serie de afirmaciones legislativas destinadas a consagrar el principio superior de la igualdad entre los seres humanos.

No se había acallado aún el entusiasmo de la Revolución Francesa cuando ya en los albores de nuestra independencia afirmábamos la igualdad, abolíamos la esclavitud y asegurábamos el principio superior de la identidad de todos los hombres, y nuestra Constitución Nacional volcó esas ideas en su Preámbulo.

¿Qué es la Argentina acaso si no un crisol de razas, de nacionalidades, de mujeres y de hombres que de todas partes del mundo han venido a converger para fundar nuestra propia patria? Creo que la iniciativa en discusión refleja de alguna manera el sentido de integración plena de todos los pueblos del mundo, que constituye la esencia misma de la República Argentina al amparo de los sabios y permanentes principios de la Constitución Nacional de 1853. De allí que debamos expresar nuestra satisfacción al brindar nuestro apoyo al proyecto y nuestra esperanza de superar algunas discrepancias circunstanciales que podamos mantener respecto de ciertas cuestiones específicas.

Quiero llevar tranquilidad a quienes han expresado en el recinto ciertos reparos hermenéuticos sobre el tema, señalando que el principio interpretativo permanente de la norma a sancionar será la constante doctrina aplicada por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, basada en el principio de igualdad que garantiza nuestra Constitución y que este proyecto reafirma.

A través de innumerables pronunciamientos la Corte Suprema ha establecido que la igualdad supone la igualdad de trato en igualdad de circunstancias. Seguramente, los jueces que apliquen la norma próxima a sancionarse habrán de tener en cuenta ese principio superior de interpretación.

No podrá entenderse que existe discriminación en razón de la nacionalidad cuando en situaciones excepcionales se exija la nacionalidad argentina, como sería el ejercicio del derecho de dominio en las zonas fronterizas, que la legislación universal reconoce como el dominio reservado de las naciones.

No podrá entenderse que corresponda aplicar la agravación de la pena en el supuesto de que la víctima sea un nacional de otro país o de credo distinto o de raza diferente a la de su victimario. La ley deberá establecer que la persecución o el odio deben ser los motivos determinantes del delito para que se asegure así una aplicación cabal de esta norma en función del espíritu que esta Cámara le otorga a este proyecto.

En la convicción de que las respetables inquietudes planteadas por los señores legisladores deberán quedar superadas mediante una interpretación precisa de la norma que estamos analizando, y de que en sustancia ella reafirma los principios fundamentales de la igualdad consagrada como numen de la organización jurídico-política de la República Argentina, el bloque Demócrata Progresista expresa su apoyo a la sanción del proyecto.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: desde ya anticipo el voto favorable de la bancada liberal al proyecto de ley en tratamiento en general. Sin perjuicio de ello, cuando lleguemos a la discusión en particular presentaremos un proyecto alternativo o, en su defecto, propondremos reformas al articulado.

Entendemos que la sanción de esta norma es reclamada por la ciudadanía argentina desde hace mucho tiempo y que seguramente impondrá un límite eficaz a la arbitrariedad y a la actuación de esos pequeños grupos que no aceptan el valor del Estado de derecho y creen que las opiniones o las ideas políticas se imponen por la fuerza, porque no tienen la aptitud intelectual ni el atractivo suficientes como para imponerse por la convicción.

En alguna medida, el proyecto del Senado cumple con este objetivo en cuanto establece la anulabilidad de las medidas arbitrarias de discriminación. Creemos que en alguna medida tam-

bién apunta, mediante las agravantes genéricas que establece en su articulado, a prevenir los delitos cometidos por motivos de odio racial o religioso.

Pero, como lo dijimos en su momento, es un proyecto perfectible. Cuando el artículo 1º condena con nulidad, a pedido de parte, los actos discriminatorios, se está refiriendo tanto a actos oficiales como a acciones privadas de los hombres. Con una lectura detenida de su articulado, los ciudadanos pueden advertir que al fulminar de nulidad los actos de los particulares, el proyecto está produciendo una modalidad discriminatoria que no tiene sentido. Estamos perfectamente de acuerdo en establecer pautas para evitar que el gobernante efectúe discriminaciones arbitraria y autoritariamente, privilegie algunas situaciones y castigue otras sin el uso de razón, por su mero arbitrio y voluntad. Estamos de acuerdo en eso, pero creemos que las acciones privadas de los hombres no están sujetas a la ley, sobre todo en este aspecto.

La discriminación por razones de sexo, características físicas, ideología política, raza o religión se da en la vida corriente y todos la toleramos porque nos parece razonable. Como ejemplo, valga el siguiente: hay clubes de comunidades, como la Sociedad Española de Socorros Mutuos, las sociedades italianas o las sociedades judías a las cuales yo, como argentino, no puedo ingresar. Esto configuraría una actitud discriminatoria según este proyecto. Quiero que se analice el problema desde este punto de vista. Es más: la discriminación por razones de sexo y por características físicas podría darse —y debería ser fulminada con nulidad— cuando una empresa requiere señoritas en lugar de ciudadanos en general, o personas de buena presencia, rechazando a los feos.

Por eso creemos que estamos por sancionar una norma que no cumple su cometido aunque tiene una buena intención, cual es la de solucionar el problema de la discriminación. Este problema se agrava cuando el proyecto establece la nulidad de actos privados discriminatorios. La verdadera discriminación consiste en el otorgamiento de privilegios o en la ejecución de rechazos arbitrarios por parte del gobierno. Quien maneja su destino económico en la actividad privada tiene discrecionalidad, y hasta la posibilidad de ser arbitrario, al elegir a sus empleados y amigos. Entonces, el artículo 1º lamentablemente va a producir una situación desgraciada, una situación no querida por la ley. Por eso hubiera sido necesario el estudio concienzudo, sensato y sereno de este proyecto en el ámbito de la respectiva comisión.

Estimamos —como lo dijo el señor diputado Contreras Gómez— que la agravante genérica que establece el artículo 2º del proyecto, elevando “en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad...”, requiere un estudio más detenido. Quien otorgue un cheque sin provisión de fondos a una persona de color vería agravado su delito —reprimido por el artículo 302 del Código Penal— por el hecho de afectar a un negro; y lo mismo sucedería si el afectado fuera un italiano, un radical o un judío. Eso me parece una exageración.

Pienso que el proyecto del señor diputado Cortese mejora notablemente la solución de la cuestión porque establece casuísticamente las agravantes, artículo por artículo, de aquellos delitos que efectivamente se pueden cometer por odio racial o religioso.

También observamos algunas expresiones, tanto del Código Penal como del proyecto en discusión, cuando se hace referencia a la agravante de odio racial o religioso, siendo ésta una expresión referida más bien a la psicología o a la psiquiatría y que tiene connotaciones que a veces no sirven para agravar.

Eso ha sido demostrado inclusive en el juicio de Nüremberg a los nazis, pues cuando se les formuló la pregunta de si habían odiado a los judíos a quienes torturaron y mataron, expresaron que en ningún momento ello había ocurrido, sino que actuaron conforme a una concepción mecanizada, adquirida desde la infancia o en épocas pasadas, imbuidos de un sentimiento que no era de odio sino el cumplimiento de una pauta del partido o del pueblo alemán.

Por otra parte, el concepto de odio resulta difícil de aplicar desde el punto de vista probatorio. Por ello, suprimimos la expresión “odio” y establecemos “por causa racial o religiosa”. No importa que el móvil sea el odio sino que el delito sea cometido en razón de tratarse de un amarillo, de un negro, de un blanco o de alguien que profese determinada ideología política.

Durante el tratamiento en particular formularemos concretamente la propuesta de modificación. Mientras tanto, adelantamos nuestro voto favorable al proyecto en general y a su vez subrayamos que vamos a propiciar algunas reformas en su momento.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Lázara. — Señor presidente: esta Cámara se confronta con un tema que pareciera no tener

la importancia de otras cuestiones inmediatas que afectan diariamente a los argentinos, pero que resulta de gran trascendencia porque atañe al significado esencial de la discriminación y a la forma como la sociedad se protege de ella. Esta cuestión constituye uno de los elementos esenciales de la vigencia de los derechos y garantías; hace a la plena vigencia de los derechos humanos, condición ésta que la sociedad se ha prometido a sí misma cumplir como un objetivo básico a obtener en el marco de la consolidación del proceso democrático.

Por eso, analizar este proyecto no es sólo tratar una cuestión formal que puede ser estudiada punto por punto o coma por coma. Es que debajo de la cuestión formal hay algo mucho más importante, que es el mensaje ético dirigido hacia toda la sociedad, una línea de acción, una norma general orientada hacia el Estado y los particulares. La sociedad así concebida no es sólo el Estado y su representación —los órganos estatales en su acción y en el ejercicio de sus funciones— sino también todos y cada uno de los ciudadanos, las clases sociales, los grupos y las organizaciones que componen el tejido social, las que en definitiva expresan en un momento dado una orientación sobre cómo se articulan las relaciones entre los hombres y se resuelven los conflictos.

Estamos legislando entonces sobre una profunda aspiración de la sociedad argentina: la eliminación de la discriminación y de sus expresiones agresivas por causas religiosas, de sexo o de color. En definitiva, establecemos la forma para que respetemos como nuestros iguales a todos los que nos rodean, sin ninguna distinción. Y esto, por sí mismo, reviste una importancia que al amparo del marco de libertad logrado por esta sociedad, tal vez no percibimos en su exacta dimensión. Asume como ley una función docente por estas razones y por la historia que recoge.

La lucha contra la discriminación no ha sido igual a lo largo de la historia de la humanidad. Se necesitó del horror y de la profunda degradación humana de la Segunda Guerra Mundial para que la discriminación se convirtiera en una lacra y fuera expurgada de la sociedad por la acción de las Naciones Unidas y de tratados internacionales.

A medida que las sociedades van creciendo, que se expanden sus libertades y se hace más eficaz la acción de sus derechos, la lucha contra la discriminación asume formas cada vez más amplias. Para la Argentina, por ejemplo, luchar contra la discriminación es rechazar enérgicamente el antisemitismo, afirmar claramente nues-

tra visión de que no pueden ser despreciados los habitantes de este país que provienen de las comunidades aborígenes y defender los derechos de la mujer.

En otras sociedades más avanzadas —donde los problemas han sido planteados y resueltos en mayor medida por efectos de las guerras, por el crecimiento de una conciencia social o a través del asentamiento de las instituciones políticas—, luchar contra la discriminación incluye problemas relacionados con el debate acerca de la sociedad que se quiere, de las personas que no pueden ser discriminadas y lo atinente a las condiciones y derechos laborales. Pero nosotros confrontamos en una sociedad en la que disputan ideológicamente quienes aspiran a consolidar un Estado democrático y quienes procuran desestabilizarlo; estos últimos quizá hoy minoritarios, pero persistentes en su actitud.

No hace mucho tiempo distintos legisladores de esta Cámara compartimos un palco en un gran acto popular que se hizo en contra del antisemitismo. Recordemos el impacto que sufrió nuestra sociedad cuando se colocaron bombas en las sinagogas y en escuelas a las que concurren pequeños de origen judío. En aquel acto se reunieron más de 50 mil personas —y con ellas, lo más representativo de la sociedad argentina— para transmitir categóricamente un mensaje de repudio al antisemitismo existente en nuestro país.

Eso antisemitismo, que constituye una de las peores formas de discriminación —tal vez la más degradante—, escribió una de las páginas más negras y siniestras de la historia de la humanidad: la de la superioridad racial. Filósofos como Gobineau y Rosenberg se refirieron a ella para fundamentar la acción de Hitler y el porqué de la "solución final" del problema judío en las cámaras de gas y en los campos de concentración, existiendo aún hoy exegetas y propagandistas de estas teorías. En este sentido, basta con recorrer las librerías de Buenos Aires para observar en sus anaqueles los libros del Tercer Reich, el *Mein Kampf* y otras obras que predicán el odio racial, y comprobar así que aún persiste en la Argentina la presencia de estos sectores. Es más: en la calle Florida se han instalado mesas ocupadas por uniformados de camisas pardas que lucen cruces gamadas en su brazo izquierdo, como si fueran remedos saine-tescos de un pasado siniestro. Todavía hay quienes anuncian ciertos planes judíos para conquistar la Argentina, así como quienes hablan de la corrupción de las instituciones democráticas, aparentemente subordinadas a centrales internacionales del poder económico de origen judío.

Esto es lo que debe ser combatido, porque atenta contra la igualdad, contra los derechos humanos y contra la sociedad democrática en su conjunto, ya que promueve el odio racial, el enfrentamiento, el conflicto; porque son heraldos de la muerte, promueven, en definitiva, la muerte como alternativa.

El antisemitismo no constituye un episodio novedoso en nuestro país. Llegó aquí en los hombros de la Legión Cívica, con los grupos fascistas que desfilaron frente a Uriburu en la década del 30, con los que perseguían a estudiantes por el solo hecho de ser judíos. En la época de la dictadura reciente también se produjeron hechos de esta naturaleza. A este respecto vale la pena recordar el extenso informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación vivida en el país. El antisemitismo demostrado por la dictadura era notorio, y mientras públicamente aparecía recibiendo a la DAIA, simultáneamente en los campos de concentración el castigo era más infame y doloroso para los condenados judíos por el solo hecho de serlo.

Esta circunstancia del antisemitismo que se ha señalado en el recinto informa también por herencia histórica a algunos sectores que integran las fuerzas armadas y que han levantado banderas de ruptura en el seno de la sociedad ya no sólo por razones de superioridad racial, sino, fundamentalmente, en la búsqueda de chivos expiatorios de la crisis.

¿De qué se trata en estos casos si no de odio? ¿Qué se quiere condenar con este proyecto de ley, si no precisamente ese odio? ¿Qué se quiere limitar, como defensa de la democracia, si no justamente ese odio?

Pero reducir la lucha contra la discriminación sólo a la denuncia del antisemitismo sería hacer un flaco favor al crecimiento de la conciencia social en esta materia. En aquel concepto también se ubica la discriminación a las sociedades aborígenes. Existen en la Argentina —y se ha discutido la cuestión cuando fue debatido el proyecto que dio origen a la ley de protección al aborigen, aún no reglamentada por razones que resultan desconocidas— gran cantidad de comunidades aborígenes que han sido no sólo discriminadas, sino frontalmente presionadas por su condición y por su aparente subvaloración como miembros de la sociedad para arrebatarles las tierras en beneficio de determinado grupo.

Este proyecto de ley posee otra característica que entiendo es esencial, y que consiste en el profundo reconocimiento a la diversidad que compone la Nación Argentina, diversidad que se halla plasmada en el pluralismo.

La Argentina ha sido señalada como crisol de razas; a ella arribaron diversas corrientes inmigratorias que conformaron el país y cuyos herederos —entre los que orgullosamente me incluyo— han preservado sus propios contenidos nacionales y sus tradiciones. La síntesis de esas culturas traducida a nuestra realidad es, en definitiva, lo que hoy constituye la Nación Argentina.

Este proyecto de ley viene a proteger esa diversidad como forma de reconocer las identidades individual y de comunidad que se exteriorizan en esa síntesis más profunda que abarca a toda la Nación.

El país no es ajeno a lo que sucede en el mundo. Hace pocos días sancionamos en este recinto por unanimidad un proyecto de declaración por el que se exhorta a otorgar la libertad al líder *antiparthoid* negro Nelson Mandela, no sólo porque es uno de los más antiguos presos políticos del mundo, ya que lleva un cuarto de siglo en las prisiones del régimen sudafricano, sino porque compartimos la idea fundamental de que nadie puede ser despojado de los derechos y beneficios de una sociedad en razón de su color. Es así que en esa oportunidad la sanción acordada significó una expresión de la lucha contra la discriminación racial.

Hoy, al abordar este tema, lo hacemos con la convicción de que la Cámara no realiza un acto transitorio o coyuntural, sino que en él recoge un centenar de años de luchas permanentes de argentinos que querían igualarse a otros argentinos, que no deseaban ser excluidos ni perseguidos, ni tampoco quedar marginados, porque se consideraban a sí mismos parte de esta sociedad. A esa historia debemos hoy nuestro homenaje y se lo rendimos con la sanción de este proyecto.

A nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, es decir, hacia el futuro, va dirigida esta iniciativa en la que se pone de manifiesto que en esta sociedad hemos crecido lo suficiente como para dejar definitivamente al margen y expulsar del cuerpo social la idea del enfrentamiento y del conflicto por razones basadas en las cuestiones ya señaladas y que son tan ajenas a la civilización como a la dignidad humana.

Sancionaremos este proyecto porque reconocemos que con la vigencia plena de los derechos humanos en el marco del sistema democrático y de la libertad se logra la plenitud de la dignidad de cada una de las personas.

Sr. Presidente (Alsogaray). — Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Giménez. — Señor presidente: si bien ya se ha expresado en nombre del bloque justicia-

lista el señor diputado Ruckauf, deseo formular unas breves consideraciones debido a un compromiso contraído en mi provincia, por el cual debo informar en este recinto sobre lo acontecido en una jornada histórica en la legislatura de Formosa.

El 11 de mayo, en oportunidad de la visita del señor embajador del Estado de Israel —declarado invitado de honor por la Cámara—, se celebró la tercera sesión especial de este año en la Legislatura de mi provincia, a la que asistieron el señor presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, el presidente de Comunidades Judías, el señor vicario general de la diócesis de Formosa, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Formosa, los señores directores del Instituto de Comunidades Aborígenes de esa provincia, los representantes de las tres etnias —toba, pilagás y wichi—, el presidente de la sociedad sirio-libanesa y representantes de las colectividades paraguayas, españolas e italiana, del movimiento obrero organizado y del empresariado formosense.

En esa sesión especial se consideraron dos iniciativas del Poder Ejecutivo de la provincia de Formosa. Se trataba de un proyecto de declaración y de un proyecto de ley en los que se expresaba, por un lado, que la Honorable Legislatura de la provincia invitaba a la Cámara de Diputados de la Nación a aprobar el proyecto de ley que tuviera sanción en el Senado de la Nación y, por el otro, se repetían todos los artículos del proyecto que hoy estamos considerando.

El gobierno y el pueblo de la provincia de Formosa fueron interpretados por los legisladores presentes de todas las bancadas. En la oportunidad se rindió homenaje a los cuarenta años de vida independiente del Estado de Israel. En esa jornada también se hizo referencia a otros modos de discriminación que los señores diputados provinciales repudiaron en sus exposiciones.

Se interpretó con justeza cada uno de los términos del proyecto de ley y se lo ubicó en los antecedentes que presenta la legislación nacional e internacional. Hoy vengo a reproducir sintéticamente un aspecto. En este sentido, quizás exista una contracara. Se trata de un tema de carácter universal, que pone su eje en la dignidad de la persona humana; pero hablaré desde la óptica del territorio provincial. Desde luego que en mi provincia de ninguna manera ocurren situaciones que rozan con discriminaciones raciales, políticas, de credo, de sexo o de raza. En aquella sesión pudimos advertir la presencia de hombres que conforman lo que en un tiem-

po muy próximo fue una raza vencida: nuestros hermanos aborígenes.

Hoy debo decir con pena que quedan situaciones de dolor por cuestiones de discriminación a pesar de los esfuerzos, de una dedicación plena y de tener una legislación que protege a los aborígenes. En materia indígena tenemos la primera ley de carácter integral, que contempla la protección de la familia, la salud y la educación, dando sentido a su organización social —que es lo más importante— y posibilitando la devolución de las tierras a sus legítimos dueños, los aborígenes, acción que se fue ejecutando durante estos cinco años de gobierno provincial.

Como una contracara de la realidad, la mayor proporción de nuestros hermanos aborígenes habita en la zona más rica de la provincia de Formosa, de cuyas entrañas se extrae el hidrocarburo. Precisamente en el departamento Ramón Lista apareció el petróleo el 8 de diciembre de 1983. Pero mientras en las entrañas de la tierra está esa inmensa riqueza, sobre la superficie habitan nuestros hermanos aborígenes sometidos permanentemente a los rigores climáticos y a todo tipo de inconvenientes.

Se han realizado esfuerzos incesantes en materia de salud y de educación. Quiero mencionar, a modo de ejemplo, que en lo que a educación se refiere se han logrado el primer plan de escolarización de niños aborígenes, la primera escuela de nivel medio para comunidades aborígenes y dos institutos superiores de formación docente para esas mismas comunidades. También podemos mencionar lo que señalaba antes con respecto a la entrega de tierras.

De todas maneras, es indudable que la Iglesia Católica fue la que más defendió y contribuyó —a través de su acción y sus documentos— a repudiar todo tipo de discriminación. Durante siglos se ha pronunciado a favor de la igualdad, la justicia, la libertad, la solidaridad y la paz en el mundo, condiciones reconocidas como fundamentales para sostener la dignidad humana.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Juan Carlos Pugliese.

Sr. Giménez. — Muchos son los documentos que hay sobre el particular, tanto surgidos del Concilio Vaticano II —como el denominado *Gaudium et Spes*— como la carta encíclica del Sumo Pontífice Juan Pablo II donde se expresa taxativamente la necesidad de devolver al hombre su condición humana por el camino de la igualdad, de la justicia y, por sobre todas las cosas, del amor.

No quiero abundar en consideraciones que ya se han realizado hoy en este recinto, pero tenía la obligación de transmitir a la Honorable Cámara la experiencia de esa jornada que se vivió el 11 de mayo próximo pasado en Formosa, que ha quedado plasmada en una declaración de la Legislatura provincial y en la ley provincial 417.

Por lo expuesto, me sumo a todos los colegas diputados que expresaron su voluntad de aprobar esta iniciativa sin siquiera agregarle una coma, pues entiendo que de este modo interpreto el clamor del pueblo formoseño. En ese sentido, quienes asistieron a esa jornada habrán podido apreciar que ni en los muros ni en los carteles de mi provincia hay palabra alguna que lesione la condición humana. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Folloni. — Señor presidente: el proyecto que hoy estamos debatiendo ha tenido un largo trámite legislativo. En 1984 el Poder Ejecutivo nacional remitió a esta Honorable Cámara una iniciativa sobre esta materia que mereció la aprobación unánime del cuerpo. Posteriormente en el Senado de la Nación el proyecto mereció diversos reparos y caducó.

En el ínterin se presentaron dos iniciativas que regulan de diferente forma esta misma materia: una del señor senador de la Rúa y otra del señor diputado Cortese. Superadas algunas dificultades y discordancias de orden reglamentario, en el Senado de la Nación se resolvió finalmente —en sesiones extraordinarias— dar curso al proyecto del señor senador de la Rúa, alrededor del cual se celebró un amplio e ilustrado debate en la Cámara alta.

Al proyecto del señor senador de la Rúa se le introdujo una serie de modificaciones tendientes a perfeccionarlo y enriquecerlo. Es así que por iniciativa del señor senador Menem se dejó de lado una redacción pormenorizada sobre la agravación de cada una de las figuras delictivas motivada por odios raciales o ideológicos, para elaborar un texto de carácter global, como el que figura en el artículo 2º del proyecto en consideración.

En torno al artículo 1º también se produjo un interesante debate en el que se plantearon ciertas dudas como las que hemos escuchado de algunos señores diputados preopinantes. El proyecto en cuestión sancionaba con la nulidad absoluta los actos discriminatorios, y en el curso del mencionado debate se intentó introducir en forma expresa y exacta la mención de que tal nulidad sería decretada de pleno derecho. Sin embargo, se considera que es necesario respetar

la voluntad individual de quien se sienta perjudicado por un acto discriminatorio. Por otro lado, estaríamos invadiendo la privacidad de esa presunta víctima si impusiéramos de pleno derecho la nulidad del acto sacándolo a la luz pública, cuando existieran razones que hicieran atendible que la víctima en cuestión prefiriese no impetrar ante la justicia la anulabilidad de dicho acto. Por ello, el artículo 1º del proyecto establece que sólo a petición del damnificado los jueces podrán decretar la nulidad del acto y ordenar la reparación del daño causado.

La iniciativa que tiene a consideración la Honorable Cámara procura, indudablemente, cumplir con un verdadero mandato constitucional. Nuestra amplia y generosa Constitución de 1853 ya legisló con absoluta precisión al respecto. En su Preámbulo, invita a todos los hombres del mundo, sin discriminación de razas o ideologías, a habitar nuestro suelo, y el artículo 15 establece que en la Nación Argentina no hay esclavos, declarando libres a quienes estuvieran sometidos a tal condición, por el solo hecho de jurar la Constitución. Asimismo, su artículo 16 regula aquella garantía individual de la igualdad absoluta ante la ley, por lo que a nuestro entender el proyecto en consideración en cierto modo viene a reglamentar estos artículos constitucionales.

También estamos cumpliendo con las obligaciones contraídas por nuestro país al haber suscrito y aprobado legislativamente diversas convenciones internacionales que tienden a tutelar los derechos individuales y la igualdad de los hombres. En este sentido, podemos citar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965 —ratificada por ley 17.722— y la Convención Americana de los Derechos Humanos de San José de Costa Rica, de 1969, ratificada en 1984 por ley 23.054.

No debe afligirnos ni debe preocuparnos la posibilidad de que esta norma se constituya en un elemento que traduzca un fin no deseado. Creemos que la clara y recta interpretación que de su texto harán nuestros jueces habrá de significar una aplicación justa y equitativa. En este sentido, la redacción del artículo 1º del proyecto marca un camino preciso y una regla de oro para la interpretación de la iniciativa. Así, al referirse a quienes incurran en algún acto discriminatorio, utiliza un adverbio —“arbitrariamente”— que no deja lugar a dudas en cuanto a su interpretación. Indudablemente, esto excluye todo temor de que la norma pueda sancionar actos

que no sean claramente discriminatorios en un sentido peyorativo. Precisamente, lo que el proyecto pretende sancionar es todo acto discriminatorio agravante, fundado simplemente en el rencor o en el odio racial o religioso.

Creemos que las disposiciones del proyecto son claras y precisas, ajustándose a los fines de quienes estamos legislando en este recinto.

Ya dije que nos hemos avenido a postergar algunas observaciones de carácter formal para la oportunidad del debate en particular, a efectos de no obstaculizar la rápida sanción de esta iniciativa. En este sentido, adelantamos que consideramos que —tal como originariamente se preveía en el proyecto sancionado por el Senado de la Nación— su artículo 1º debería ser incluido en el Código Civil por las razones que en su momento daremos. Asimismo, entendemos que los artículos 2º y 3º deben formar parte integrante de nuestro Código Penal puesto que ello condice con una correcta metodología jurídica, evitándose así una dispersión legislativa que conspira contra una hermenéutica correcta y un debido conocimiento de las leyes. Precisamente, esta opinión se entronca con la corriente jurídica actualmente imperante, que trata de concentrar las normas que legislan sobre materias específicas en cuerpos únicos.

Por estas razones, y con las reservas ya manifestadas respecto del tratamiento en particular, damos nuestro apoyo a la sanción en general del proyecto.

Sr. Presidente (Pugliese). — La Presidencia se permite sugerir a los señores diputados que traten de abreviar sus exposiciones a fin de que el proyecto pueda sancionarse en esta sesión.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Auyero. — Señor presidente: sólo deseo anticipar el voto favorable de mi bancada a esta iniciativa, así como nuestra adhesión a algunas reservas que otros señores diputados han formulado.

Teniendo en cuenta la observación que acaba de hacer el señor presidente, solicito que el texto del discurso que tenía previsto pronunciar sea insertado en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Pugliese). — Oportunamente se someterá a votación la proposición del señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zaffore. — Señor presidente: deseo manifestar mi adhesión al proyecto en tratamiento, que reglamenta un mandato constitucional reflejado en tratados internacionales firmados por

nuestro país y cuya sanción otorgará mayor fuerza al espíritu de la norma fundamental de la República.

Creemos que este proyecto no sólo protege a las víctimas de actos discriminatorios sino también a la propia sociedad, ya que en ella subsisten por cierto grupos predispuestos a actos de esa naturaleza, grupos racistas que anidan en su seno invocando los fantasmas del fascismo y del nazismo. Ellos deben ser atacados y erradicados como si se tratara de una patología que afecta a la propia integración y condición nacional de la República.

En cuanto a los reparos que se han hecho al proyecto, coincido con el señor diputado por Salta en que de su artículo 1º surge una directiva para los jueces en el sentido de no afectar con sus decisiones el derecho de asociación ni aquellos que puedan entrar en colisión con los fines perseguidos por la norma.

Deseo subrayar que esta ley persigue el propósito de afirmar la condición nacional, porque la Argentina —como se dijo antes— se forjó con elementos autóctonos y con individuos que vinieron desde otras etnias y religiones. Cabe puntualizar esta diversidad porque ha habido por cierto discriminaciones contra el propio elemento criollo, y ha existido un tratamiento diferente para aquellos inmigrantes que tuvieran determinado origen religioso o racial. En consecuencia, sancionar los actos de discriminación no sólo responde a una necesidad de justicia sino también a la razón de fortalecer la integración nacional.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. Fernández de Quarracino. — Señor presidente: realmente nos alegramos por el tratamiento de este proyecto de ley, no porque tengamos vocación de penalizar, sino por su espíritu. Ojalá nunca haya que aplicarla, aunque sabemos que esto es una utopía. Leyes como ésta no cambian por sí mismas la sociedad, pero son necesarias para el funcionamiento de la justicia y para dar marco a las instituciones, entre ellas el Parlamento.

Si nos referimos a la idea de la igualdad del hombre y la mujer —ya que mi compañero de bloque ha hablado de la discriminación racial y sectorial—, reconozco que este Parlamento ha avanzado en gran medida a ese respecto, sancionando muchas leyes, resoluciones y declaraciones tendientes a ello. Pero pienso que todavía tenemos que revisar y mejorar muchas normas del derecho, concretamente las referidas a la violencia doméstica, que este año ha sido puesta

sobre el tapete por un hecho desgraciado. En esto tenemos que incluir no sólo a la mujer sino, fundamentalmente al niño, que es el gran desconocido del maltrato familiar. Tenemos que legislar con respecto a la obligación de prestar alimentos, cuyas normas son burladas impunemente en los juicios de divorcio. Debemos revisar el tema de la negación de la paternidad, que a esta altura del avance científico puede ser muy fácilmente solucionado y que crea a la mujer tanto problemas económicos y sociales como afectivos. También tendremos que considerar el manejo de los bienes conyugales, los cuales todavía están en manos del marido en caso de duda o confusión. En el terreno laboral existen asimismo temas que debemos contemplar si queremos terminar con la discriminación contra la mujer. Todos hemos adherido al principio de "igual trabajo, igual salario", pero sabemos que en la práctica esto no se cumple. Bastan las estadísticas. En todos los niveles laborales, a igualdad de sueldo y de categoría se exige más capacitación y esfuerzo a la mujer. En el extremo superior de la escala social son muy pocas las mujeres que acceden a cargos directivos en las grandes empresas, tanto privadas como estatales. Esto lo vemos y no necesita mucha demostración. El varón tiene que ser capaz, pero fundamentalmente paciente para llegar a esos cargos. A la mujer se le exige brillantez.

En cuanto al trabajo en el hogar, mientras sigamos creyendo que las amas de casa son sacerdotisas y reinas —no trabajadoras del hogar— habrá discriminación. Mientras sigamos pensando que lavar, cocinar, atender al bebé y al marido son misiones femeninas y no contribuciones para el crecimiento de la familia y por ende del país, habrá discriminación.

Mientras haya miles de mujeres que trabajan en las casas de familia en condiciones infrahumanas, con la única protección legal de reglamentos y decretos ya obsoletos, habrá discriminación.

Mientras existan miles y miles de mujeres rurales que no son reconocidas como trabajadoras independientes sino que cobran sus salarios por medio de sus maridos, habrá discriminación.

Tenemos leyes excelentes, pero sabemos que no se cumplen, como las de jardines maternales, de licencia por maternidad o de prohibición de despido a las embarazadas.

Hay un uso de la mujer en la publicidad y en los distintos medios, donde no es reconocida como persona sino como anzuelo para el *rating* o para la venta de artículos, desde dentífricos hasta televisores y automóviles.

Hay un uso y abuso de la mujer, utilizada para el éxito personal, político o económico del varón porque se ha internalizado y se sigue internalizando este sofisma: detrás de cada gran hombre hay una gran mujer.

Tenemos también una gran cantidad de mujeres solas, jefas de familia, especialmente madres solteras o mujeres abandonadas, a las que la sociedad no apoya para nada sino que las sobrecarga de trabajo.

Tal vez les hagamos un monumento como mártires de la familia, del hogar y del trabajo, pero también en ese caso habrá discriminación, sobre todo cuando ya las Naciones Unidas nos están subsidiando y proponiendo a todos los países subsidios, créditos y tarifas preferenciales, escuelas de capacitación y muchos otros medios para ayudar a este sector femenino.

Sólo cuando concretemos éstas y otras soluciones que la creatividad, la inteligencia y el ingenio de los parlamentarios y de todos los que tienen poder de decisión vayan brindando, este proyecto de ley que votaremos hoy será algo más que un hermoso texto que condena la discriminación por razones de religión, de raza, de sector o de sexo.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Estévez Boero. — Señor presidente: la Unidad Socialista adhiere a este proyecto que condena la discriminación y que nos parece está bastante demorado. En ese sentido, entendemos que estos problemas deben ser superados culturalmente, y a los efectos de no demorar más su sanción voy a solicitar la inserción en el Diario de Sesiones del discurso que pensaba pronunciar.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Avila Gallo. — Señor presidente: en forma breve quiero expresar que nuestra representación en esta Cámara va a votar favorablemente el proyecto en consideración.

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Cortese. — Señor presidente: hoy el Parlamento argentino trata un tema altamente relevante. En su momento, en 1984, el Poder Ejecutivo promovió una ley antidiscriminatoria, que mereció un serio y profundo tratamiento en esta Cámara.

Debatimos y discrepamos técnicamente, más allá inclusive de las posiciones que los bloques hayan podido alcanzar. Yo esgrimí una posición discrepante en torno a lo que era aquel dicta-

men de comisión. Pero dimos el debate; nos pronunciamos y propusimos a la sociedad argentina un proyecto de ley que nos encolumnara en la vocación democrática y republicana de conformar una sociedad definitivamente libre.

Lamentablemente, aquella idea sucumbió en el Senado, caducando parlamentariamente. Por eso, presenté otro proyecto de ley proclamando las mismas ideas que había sustentado en aquel debate. Es cierto que el señor senador de la Rúa, con bastante similitud, propuso un texto casi idéntico al de aquella iniciativa. El Poder Ejecutivo, ratificando la voluntad de que la República Argentina cuente con una ley de este tipo, incorporó entre los temas a tratar en el período de sesiones extraordinarias de 1987 el asunto debatido en la Cámara de Diputados. Pero en el Senado se produjo la discusión de si eran o no competentes para abocarse a esta cuestión. En este sentido, un hombre del justicialismo defendió la posición que personalmente debía beneficiarme aunque el Senado entendió que debía tratarse el proyecto del señor senador de la Rúa.

No importan los autores ni las medallas. Lo que importa es que el Parlamento argentino hoy tiene la voluntad de lanzar hacia nuestra sociedad un mensaje claro y preciso que la dote de una legislación acorde con este tiempo histórico de la República.

Este tema no se resuelve con una ley. Tampoco basta que una sociedad se decida a transitar por caminos de libertad, sin discriminaciones. Los ejemplos y las experiencias de este siglo —para no remontarnos más atrás— podrían señalarnos que hacen falta ambas cosas. Por un lado, es menester que el Estado, a través de sus instituciones competentes, promueva y sancione leyes que rijan los derechos y fijen las penas de quienes los violenten. Pero hace falta además que la sociedad sepulte los signos de autoritarismo y de discriminación.

En la Argentina, desde hace mucho tiempo, mayoritariamente pretendemos la vigencia plena de los beneficios de la libertad. De allí la importancia de este proyecto de ley, más allá de las discrepancias que habré de señalar, que no impedirán su sanción en el día de hoy.

Si rastreamos en el tiempo, la propia Asamblea del Año XIII sepultó para siempre la esclavitud en nuestro territorio al decretar la libertad de vientres, y nuestra Constitución ratifica el concepto diciendo que serán libres todos los hombres del mundo por el solo hecho de pisar nuestro suelo.

En 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que en su artículo 2º establece: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición."

Posteriormente, nuestro país dicta la ley 17.722, que ratifica la Convención Internacional sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1965.

También formamos parte de la UNESCO, que en 1960 sancionó la Convención Contra la Discriminación en la Enseñanza.

Dictamos la ley 17.677, que ratificó el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado en el ámbito de las Naciones Unidas.

Asimismo, en 1984 este Parlamento sancionó la ley 23.054, que aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que data del año 1969.

En el actual período constitucional también sancionamos otras normas, como la ley 23.179, que ratifica la Convención Sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer, y en 1986 la ley 23.313, por la cual se ratifica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobados también por las Naciones Unidas.

Vamos a sancionar este proyecto de ley en el convencimiento de que la sociedad está reclamando un nuevo mensaje para un país que ha decidido transitar otro tiempo de la historia universal y que pretende situarse en el concierto de los países libres del mundo, persuadido de que hay sectores de su sociedad que alguna vez encontraron abiertas las puertas para vivir, trabajar, estudiar y crecer como colectividad en esta tierra, pero que hoy nos están señalando que se ha mantenido como rasgo cultural cierto resabio de autoritarismo que aún no hemos podido erradicar.

Por eso aprobaremos con entusiasmo este proyecto de ley, como una respuesta a esa sociedad, pero con el convencimiento de que no es una norma perfecta como la que anhelaríamos sancionar. En este sentido, ya existe consenso para que luego de que sea promulgada esta norma se considere en este recinto un texto modificatorio del que aprobaremos ahora, por el cual los actos discriminatorios que aquí se esta-

blecen como de nulidad relativa sean considerados de nulidad absoluta, sin que haga falta para la intervención judicial instancia de parte ante tales situaciones de injusticia social.

Además, esa nueva propuesta determinará con precisión los actos no comprendidos en la tipificación aquí determinada, ello en función de intereses superiores del Estado y de la comunidad que señalen tal conveniencia."

Asimismo, vamos a especificar taxativamente en ese proyecto los delitos en los que la discriminación pueda ser motivo de comisión y merezca, por conducta disvaliosa, su agravación.

Sin embargo, más allá del convencimiento de que la que consideramos no es una iniciativa perfecta —diría que está cargada de imperfecciones—, creemos que si constituye un paso idóneo para que definitivamente la libertad esté garantizada y la discriminación sepultada en nuestra patria, mostrándonos en la cúspide de los países libres del mundo. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pugliese). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Stubrin. — Señor presidente: anuncio que he decidido desistir de hacer uso de la palabra y en consecuencia hago moción de que se cierre el debate.

Sr. Presidente (Pugliese). — Como el señor diputado figura en último término en la lista de oradores, se va a llamar para votar en general.

—Se llama para votar. Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar en general.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se va a votar si se efectúan en el Diario de Sesiones las inserciones solicitadas por los señores diputados Mosca, Auyero y Estévez Boero.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pugliese). — Se harán las inserciones solicitadas¹.

En consideración en particular el artículo 1º. Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Tal como lo anunciara durante el tratamiento en general, deseo proponer

¹ Véase el texto de las inserciones en el Apéndice. (Pág. 3544.)

—González (A. I.): para el día 28 de julio de 1988, por razones particulares (1.663-D.-88).

—Siracusano: para el día 28 de julio de 1988, por razones particulares (1.666-D.-88).

—Giacosa: para los días 28 y 29 de julio de 1988, por razones particulares (1.668-D.-88).

—Alvarez Guerriero: para el día 28 de julio de 1988 por razones oficiales (1.671-D.-88).

—Sella: para el día 28 de julio de 1988, por razones particulares (1.674-D.-88).

—Carignano: para el día 28 de julio de 1988, por razones particulares (1.675-D.-88).

—Romero (R.): para el día 28 de julio de 1988, por razones particulares (1.676-D.-88).

—Ramírez: para el día 28 de julio de 1988, por razones particulares (1.677-D.-88).

—De la Sota: para el día 28 de julio de 1988, por razones particulares (1.678-D.-88).

—Estévez Boero: para el día 28 de julio de 1988, por razones particulares (1.687-D.-88).

—Reinaldo: desde el 26 de julio al 2 de agosto de 1988, por razones particulares (1.715-D.-88).

—Vanossi: desde el 1º al 12 de agosto de 1988, por razones particulares (1.720-D.-88).

—Ball Lima: para los días 3 y 4 de agosto de 1988, por razones particulares (1.724-D.-88).

—Sobre tablas.

C. INSERCIONES

1

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO MOSCA

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre sanción de actos discriminatorios

Señor presidente:

La reimplantación del sistema democrático y republicano ha traído consigo en nuestra República, un renovado interés por privilegiar los derechos humanos, no como un mero otorgamiento o concesión del orden jurídico sino como prerrogativas insitas en toda persona.

Ontológicamente, por ser precisamente persona, el hombre tiene derechos naturales que le son inherentes y que son regulados por la ley humana, preexisten a ella y le son superiores lo que equivale a afirmar que la ley humana debe reconocerlos y no puede violarlos ni frustrarlos.

Quizás una de las más vistosas debilidades de la civilización actual esté en una inadecuada visión del hombre. La nuestra es, sin duda, la época de los humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es también la época de las más hondas angustias del hombre respecto de su identidad y destino.

Como ha expresado con elocuencia el papa Juan Pablo II, "la dignidad del hombre es conculcada, a nivel individual, cuando no son debidamente tenidos en cuenta valores como la libertad, el derecho a profesar la religión, la integridad física y psíquica, el derecho a los bienes esenciales, a la vida. Es conculcada también, a nivel político y social, cuando el hombre no puede ejercer su derecho de participación o está sujeto a injustas e ilegítimas coerciones, o sometido a torturas físicas o psíquicas..."

Vemos con profundo dolor el aumento masivo, a veces, de violaciones de derechos humanos en muchas partes del mundo. Quién puede negar que hoy día hay personas individuales y poderes que violan impunemente derechos fundamentales de la persona humana, el derecho a la vida, al trabajo, a la paz, a la libertad y a la justicia social, el derecho a participar en las decisiones que conciernen al pueblo y a las naciones. Y

qué decir cuando nos encontramos ante formas variadas de violencia colectiva, como la discriminación racial de individuos y grupos, la tortura física y psíquica de prisioneros y disidentes políticos.

Cuando en la tarea preventiva y primitiva se abandona la preocupación por la justicia y por el derecho se está simplemente ante el rigor de la fuerza; esto lo sabemos bien los argentinos. Hacer una sociedad más justa significa, entre otras cosas, que no haya injusticia y desigualdad en la impartición de la justicia; que no haya nadie sin amparo de la ley y que la ley ampare a todos por igual; que no prevalezca la fuerza sobre la verdad y el derecho, sino la verdad y el derecho sobre la fuerza.

Hoy llega a este recinto de la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo proyecto de ley —que ya cuenta con la media sanción del Senado— que pone su énfasis en la protección de derechos humanos esenciales, tales como el derecho a la nacionalidad, a la libertad religiosa, a la libertad de expresión política o gremial, al sexo, a la posición económica, a la condición social.

Es un acto dignificante que muestra el valor de la democracia como aquel régimen político que exalta por sobre todas las cosas, el valor de la personalidad humana y su inconculcable dignidad.

Nos place recordar que desde estas mismas bancas los representantes del pueblo promovieron la derogación de normas lesivas a los derechos humanos como, por ejemplo, las contenidas en el Código Penal de la dictadura. Desde este mismo poder de la democracia se generó la ley nacional de hábeas corpus, que hoy constituye un moderno y eficiente ordenamiento del derecho a la libertad física y que tiene plena y efectiva operatividad.

También este recinto legislativo sirvió de marco necesario y fundamental para lograr la sanción de la ley 23.054, que este Congreso produjo el 1º de marzo de 1984. Por esta ley de la Nación nuestro país aprobó definitivamente la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos llamada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad del mismo nombre.

Tampoco quiero olvidarme de la ley 23.059, sancionada el 22 de marzo de 1984 mediante la cual se abolió el oprobioso sistema creado por la ley 21.795, mediante el cual un argentino podría llegar a perder su propia nacionalidad de origen, a verse en la humillante condición de ser un apátrida, a veces por el solo hecho de no pensar igual que quienes detentaban ilegítimamente el ejercicio del poder.

Esta densa y profunda tarea reparadora desplegada por las instituciones de la democracia viene a completarse con la propuesta de una nueva norma tuitiva de los derechos más esenciales de la persona humana. Esta iniciativa reconoce una protección eficaz e inmediata a todo aquel que se encuentre en la situación de ver arbitrariamente impedido, obstruido, restringido o menoscabado el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Mediante esta acción operativa los jueces de la Nación podrán —a pedido del damnificado— dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y reparar el daño moral y material ocasionado.

El proyecto —cuya aprobación desde ya solicitamos— aclara que se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

Esto implica reconocer carácter eminentemente operativo a derechos fundamentales reconocidos explícita e implícitamente en nuestra Constitución Nacional. También proteger eficazmente derechos especialmente reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Igualmente, con la aprobación de esta iniciativa, se da estricto cumplimiento a ineludibles compromisos contraídos en resguardo de la libertad y de la democracia en el Pacto de San José de Costa Rica, que antes mencionamos.

Simplemente me permitirá recordar que este tratado internacional suscrito el 22 de noviembre de 1969 y aprobado por la ley nacional 23.054 establece en su artículo 1º que “los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Consecuentemente con este principio el artículo 29 de la misma Convención expresa que “si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1º no estuviese ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medi-

das legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

Esto implica que este gobierno de la democracia no se ha limitado simplemente a ratificar el mencionado pacto internacional de derechos humanos luego de quince años de existencia del mismo, hecho desde ya suficientemente importante, sino que también promueve una serie de disposiciones legislativas que indican la firme e irrenunciable voluntad de nuestra República por afianzar definitiva e inexorablemente el irrestricto respeto por los derechos esenciales del hombre.

La iniciativa en estudio se completa con un agravamiento de penas por delitos cuya tipicidad haya sido establecida por el Código Penal o leyes complementarias, cuando los mismos sean cometidos por persecución u odio a una raza, religión, o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. También se establece la imposición expresa de pena de prisión de un mes a tres años respecto de quienes participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico, o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.

Señor presidente: la sanción a esta iniciativa nos hace sentir en profundidad aquello que tantas veces repetimos: el derecho es el instrumento más precioso y adecuado para mantener la paz social, como expresión de fe en la razón y desplazamiento de toda violencia.

Nadie se hundirá en la fatalidad de las abjuraciones y de los renunciamentos —como decía Mercader— mientras conserve su fe en el derecho y en la justicia.

Yo agregaría que el derecho y la justicia sólo pueden concebirse en libertad de la democracia, porque como decía Couture sin libertad no hay derecho, ni justicia, ni paz.

Estoy seguro que en el ánimo de los señores legisladores que nos acompañarán con su voto favorable a la sanción de la iniciativa no existe una sola razón de especulación política o de mero oportunismo. Porque creemos firmemente en la democracia estamos convencidos de la necesidad de defender al hombre en su dignidad y derechos.

Tal vez en el fondo de cada argentino esté presente aquel pensamiento de Thomas Paine: “El que quiera asegurarse su libertad debe proteger hasta a sus enemigos de toda opresión, porque si viola su deber establecerá un precedente que lo alcanzará a él mismo”.

Yo preferiría cerrar estas palabras con aquella convicción que la siento muy presente en los hombres de la democracia y que otros argentinos lamentablemente no supieron conocer.

Dice Orgaz: “Es bastante fácil, sin duda, respetar los derechos humanos en nuestros amigos y aun en quienes nos son indiferentes; más difícil es respetarlos en nuestros enemigos. Pero esta última actitud es la que permite distinguir, precisamente, el régimen democrático del totalitario”.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO AUVERO

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre sanción de actos discriminatorios

Señor presidente:

Nuestra bancada va a votar esta iniciativa en forma positiva.

El proyecto, que tiene por objetivo proteger a los individuos y a los sectores sociales de los actos u omisiones discriminatorias, nos lleva a efectuar ciertas reflexiones: la primera parece elemental, pero es necesario hacerla ya que fue y es negada por la sociedad, y es que este proyecto existe porque en la Argentina hay discriminación, porque en la Argentina se ejercen discriminaciones sobre minorías nacionales, raciales o religiosas. Por eso, un análisis exhaustivo de los motivos de la existencia de este proyecto no se debe limitar a los bochornosos atentados y amenazas que se desencadenaron el año pasado contra la colectividad judía.

La discriminación no existe sólo en hechos aislados, en la acción de pequeños grupos facciosos, en las declaraciones reaccionarias de algunos personajes de la ultraderecha. La discriminación está en nuestra legislación, en nuestro sistema educativo, en nuestro servicio militar obligatorio, en nuestra cultura.

La legislación sobre migraciones —para dar un ejemplo— permite a la Dirección Nacional de Migraciones ejercer un trato manifiestamente desigual sobre los inmigrantes latinoamericanos que el que se ejerce sobre la inmigración europea. Esta actitud, en donde se viola incluso la amnistía realizada por el Poder Ejecutivo nacional que beneficia a los residentes ilegales fue denunciada en su momento por la Pastoral del Migrante de la Diócesis de Neuquén, que está a cargo de monseñor De Nevares.

La mujer, en la sociedad argentina, todavía es víctima de un trato diferente especialmente en el área laboral.

Si nos retrotraemos a los negros años de la dictadura militar, vemos que los grupos de tarea se ensañaban con especial crueldad con los prisioneros de origen judío. Aunque hablar de torturas y de persecuciones en la Argentina de hoy pareciera estar fuera de época. El

alegre desprocesamiento de los militares culpables de la represión quiere cubrir con un manto de olvido toda una época, para dejarnos sin resolver cuestiones que —sin duda— volverán a incidir en la realidad nacional.

Existen denuncias constantes de tratos diferenciales que perjudican a grupos raciales o religiosos durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio.

Es claro entonces que hay discriminación en múltiples áreas de nuestra vida social; si este proyecto sirve para limitarla, para denunciarla, para que los que sean víctimas de ella sean tratados con igualdad, de acuerdo con nuestros principios constitucionales y con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, si este proyecto sirviera para todo esto, sería un importante aporte para la democratización de nuestra sociedad.

Celebro que existan iniciativas como éstas, pero no puedo dejar de señalar que el grave problema de la discriminación no cesará por obra y voluntad de legislaciones más o menos abstractas. Lo que debe modificarse es toda una cultura totalitaria que sustenta la creencia de la existencia de grupos sociales, razas, religiones o sexos superiores a otros, así como de ideas políticas a las que se debe perseguir y a las que no se les debe permitir su confrontación con "verdades sacrosantas e inamovibles".

¡Cómo no ser escéptico cuando en el mismo momento en que estamos votando este proyecto nuestra sociedad priva del derecho a la educación a la salud, a la vivienda, a un enorme sector de nuestra comunidad; cuando un proyecto económico dirigido y monitoreado desde el exterior produce la pauperización creciente y la marginación social de millones de argentinos; cuando en esta misma Cámara se avaló la impunidad de los que persiguieron y torturaron a personas indefensas, por sus ideas políticas!

Votaremos afirmativamente, pero guardaremos en el fondo de nuestra conciencia la íntima convicción de que los problemas fundamentales de nuestra patria no se resuelven sólo con buenas intenciones, sino asumiendo con coraje la responsabilidad que los acontecimientos históricos merecen.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ESTEVEZ BOERO

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre sanción de actos discriminatorios

Señor presidente:

Estamos ante la sanción del proyecto de ley antidiscriminatoria que votaremos favorablemente, y nos parece oportuno poder expresar algunas ideas y algunos pensamientos sobre aspectos que hacen referencia al respeto mismo de los derechos humanos, de las libertades individuales, a la igualdad de todos los hombres, de todos los pueblos y de todos los credos ante la ley.

Y se hace oportuno hablar hoy en este recinto, cuando hace pocos días cumplía 70 años de vida un hombre

que ya es un símbolo, mártir de la discriminación racial de un régimen abominable como lo es el *apartheid*, que en los umbrales del siglo XXI se constituye en una de las vergüenzas más terribles para la comunidad internacional. Nelson Mandela, principal dirigente del Congreso Nacional Africano, no sólo cumplió setenta años de vida, sino también veinticinco de cárcel, por el único delito de pregonar la igualdad entre los hombres de su patria. Esta es una de las asignaturas pendientes que le queda a la humanidad para hacer realidad aquella sentencia de Hipólito Yrigoyen, que dice: "Los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos".

Desde los orígenes de nuestra nacionalidad, el "pueblo argentino reconoce una lucha permanente en defensa de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad. Mayo de 1810 representó la concreción de esos ideales a través de la participación del pueblo, quien ejerciendo la democracia impulsó la independencia nacional. La Asamblea del Año XIII derogó la mita, la encomienda, el yanaconazgo y estableció disposiciones que reconocieron a los indios como "hombres libres" y en "igualdad de derechos a los demás ciudadanos", en virtud de lo cual se ordenaba la elección de diputados indios en las cuatro intendencias del Alto Perú. También abolió el tormento y quemó en la plaza pública los instrumentos de tortura y decretó la libertad de vientres, concretando la liberación de los hijos de esclavos.

Los Constituyentes del 53 plasmaron estos principios en el Preámbulo de la Constitución Nacional y en el capítulo de la Declaración de Derechos y Garantías, que en su artículo 16 dice: "La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley..."

A este legado los socialistas hicieron también su aporte. En su lucha contra la ley 4.144, llamada "de residencia", que autorizaba al Poder Ejecutivo para expulsar y detener extranjeros sin causa jurídica que lo justificara o legitimara, ley que comportara el desmoronamiento de todo el edificio institucional de la Nación, el joven diputado socialista por el barrio de la Boca, Alfredo Palacios, el 27 de mayo de 1904 presentaba un proyecto de ley de un único artículo que decía lacónica y rotundamente: "Queda derogada la ley 4.144 de extrañamiento de extranjeros sancionada el 22 de noviembre de 1902". Enrique Dickmann, también diputado socialista, en su obra *Ideas e ideales*, dijo: "Entre las conquistas más preciadas del libre pensamiento, del libre examen y de la libre crítica, con toda seguridad, se cuenta la tolerancia. Frente a las viejas y rancias doctrinas teocráticas, absolutistas, intransigentes e intolerantes, que imponían por fuerza sus credos, castigando cruelmente con el tormento y la hoguera a los audaces que se atrevían a discutir o dudar de la veracidad de tales doctrinas y credos; frente al viejo espíritu dogmático, inquisitorial y torquemadesco, se levanta el espíritu moderno del libre examen, de la libre elección de las creencias religiosas, filosóficas y políticas, sin recíprocas imposiciones, con un amplio sentido de la mu-

tua tolerancia, en cuanto esto no daña ni estorba a la salud, el bienestar, la ética y la estética de un tercero".

La profesora Alicia Moreau de Justo, en el Colegio Secundario de Señoritas de la Universidad de La Plata, en las primeras décadas de este siglo, enseñaba a sus alumnas: "Dejemos el prejuicio de las razas, sobrevivencia ancestral que nos hace mirar con indulgencia las matanzas de negros, chinos e indios; destruyamos estos falsos conceptos, escudo tras el cual se ocultan o disimulan las abominaciones de las guerras coloniales, y que sobre sus ruinas los pueblos estrechen sus manos, los más avanzados ayudando a los retardatarios, en vez de aniquilarlos con desprecio feroz y que continuando con la obra del tiempo y del saber, se forma la familia única de la humanidad del porvenir".

Con la reconquista de la democracia nuestro país ha sancionado como leyes las resoluciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, de las Naciones Unidas. Estos instrumentos internacionales tienen de común un punto de partida y un destinatario final, que es el hombre. Sus derechos esenciales no derivan de su nacionalidad o de su status social sino que reconocen como fundamento los atributos de la persona humana (Preámbulo del Pacto de San José). Ninguno de esos cuerpos legales admite discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (artículo 1º del Pacto de San José). Repudia asimismo los excesos en la represión, las persecuciones y las torturas.

Nosotros pensamos que la democracia hoy permite avanzar en asegurar condiciones de dignidad y seguridad idénticas para todos los argentinos. En democracia no puede haber libertad para incitar al odio, a la discriminación o a la violencia. Cada grupo integrante de nuestra sociedad debe ser respetado y debe existir una verdadera convivencia entre los argentinos, "no importa la sangre que corre por sus venas, la religión que los conforma o el pensamiento que los anima".

Por considerar que este proyecto de ley aporta en el sentido mencionado, es que lo votamos favorablemente.

D. PLANILLA DE ASISTENCIA DE LOS SEÑORES DIPUTADOS A LAS SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA

(Artículo 25 del reglamento)

Mes de mayo de 1988

Total de reuniones: 12 (#)

DIPUTADOS	Presente	Ausente con aviso	Ausente sin aviso	Con licencia	En misión oficial
Abdala, Luis Oscar	6	—	6	—	—
Adaime, Felipe Teófilo	8	—	3	1	—
Adamo, Carlos	5	—	6	1	—
Alasino, Augusto José M.	5	—	6	1	—
Albarrón, Alberto Gustavo	7	—	5	—	—